EXISTENCIA DE COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON LOS CARGOS POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, INTIMIDAD Y GARANTÍA DE INVIOABILIDAD DEL DOMICILIO, DIRIGIDOS CONTRA LOS PARÁGRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1801 DE 2016, REFERENTES A LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SE DENOMINAN COMO CLUBES SOCIALES, CASAS CULTURALES Y CENTROS SOCIALES. LA CORTE SE ABSTUVO DE FALLAR DE FONDO SOBRE OTROS CARGOS FORMULADOS CONTRA LAS MISMAS NORMAS, POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO E INEPTITUD DE LA DEMANDA

III. EXPEDIENTE D-12933 - SENTENCIA C-291/19 (junio 26)
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

1. Norma acusada

LEY 1801 DE 2016
(julio 29)

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia

ARTÍCULO 86. CONTROL DE ACTIVIDADES QUE TRASCIENDEN A LO PÚBLICO. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la convivencia y el orden público, casas culturales, centros sociales privados o clubes privados o similares, que ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados o para el público en general, estarán sujetos a las normas del presente Código.

PARÁGRAFO 1o. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes distritales o municipales podrán establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes mencionados, y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el presente Código.

PARÁGRAFO 2o. Facúltese a las autoridades de Policía y Comandantes de Estación de Policía para ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con el fin de verificar el cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y para imponer las medidas correctivas que correspondan”.

2. Decisión

Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-204 de 2019, en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos por el desconocimiento de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, y de la garantía de la inviolabilidad del voto.

Segundo. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los párrafos 1 y 2 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos por la presunta violación de los artículos 13, 14, 26, 29, 38, 39 y 58 de la Carta Política, por carencia actual de objeto y por ineptitud sustantiva de la demanda.

3. Síntesis de los fundamentos

La Corte debía establecer si la habilitación otorgada en el artículo 86 de la Ley 1801 de 2016 a los alcaldes para fijar los horarios de los establecimientos en que funcionan los clubes sociales cuya actividad pueda afectar la convivencia y el orden público, así como las medidas correctivas por su inobservancia, y a las autoridades de policía para ingresar en tales establecimientos con el objeto de verificar el cumplimiento de tales horarios, y para imponer las citadas medidas correctivas, desconoce la garantía de la inviolabilidad del domicilio y los derechos a la intimidad, al derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al debido proceso y la propiedad privada, y la libertad de asociación.

La Corte arribó a dos conclusiones. La primera, en relación con las acusaciones por la transgresión de la garantía de la inviolabilidad del domicilio y de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, concluyó que ya se había configurado el fenómeno de la cosa juzgada, ya que en la sentencia C-204 de 2019 este tribunal había evaluado la validez de las mismas disposiciones a la luz de estos mismos parámetros. En este orden de ideas, se resolvió estarse a lo resuelto en aquel fallo.

La segunda, en relación con los demás señalamientos, concluyó que no era viable el escrutinio judicial, debido a la confluencia de las siguientes circunstancias: (i) porque en la sentencia C-204 de 2019 se declaró la constitucionalidad condicionada de los preceptos demandados en este proceso, precisando, respecto del párrafo 1, que la facultad de los alcaldes para fijar horarios de funcionamiento debe ejercerse mediante actos administrativos individuales o de contenido particular debidamente motivados, y, respecto del párrafo 2, que la potestad de las autoridades de policía únicamente procede frente a las actividades que trascienden a lo público, declaradas previamente mediante acto administrativo debidamente motivado y de contenido particular, con el único fin de verificar la observancia del horario, y dentro de los horarios considerados de cierre; dado que las acusaciones se estructuraron en función de un contenido normativo que ha variado sustancialmente al día de hoy en razón de los condicionamientos introducidos por la Corte Constitucional, existe una carencia actual de objeto por sustracción de materia; (ii) porque los cargos de la demanda de inconstitucionalidad eran consecuenciales a las acusaciones por la presunta violación de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad, ya desestimados en la sentencia C-204 de 2019, decayendo el fundamento de aquellas acusaciones; (iii) finalmente, los cargos no proporcionaron los elementos estructurales del juicio de constitucionalidad propuesto por el actor, en la medida en que, desde la perspectiva de las normas demandadas, las censuras se sustentaron en un entendimiento de la normatividad legal que no se ajusta a su tenor literal; desde la perspectiva de los referentes del juicio de constitucionalidad, el accionante no especificó los contenidos de la Carta Política que fueron transgredidos; y, desde la perspectiva de las *razones de la oposición normativa*, en la demanda no se indicaron tales razones, concentrándose en indicar los riesgos que entraña la interpretación o aplicación indebida de la norma por parte de los operadores jurídicos, a partir de argumentos difusos que no identifican la razón de la incompatibilidad entre la medida legislativa y el ordenamiento superior.

4. Aclaración de voto

El Magistrado **Antonio José Lizarazo Ocampo** anunció la presentación de una aclaración de voto, toda vez que si bien la Corte ha de estarse a lo resuelto en la sentencia C-204 de 2019 respecto de los párrafos 1 y 2 del artículo 86 de la Ley 1801 de 2016, en su momento salvó el voto en relación con esa decisión